

INFORME POLÍTICO DE LA COORDINADORA DE IUCA

Aprobado con el 80% de votos favorables y con el 20% de abstenciones

Introducción

Este informe recoge la valoración política de Izquierda Unida Andalucía ante la situación crítica que vive nuestra comunidad. En un contexto marcado por la emergencia climática, el abandono del mundo rural, el deterioro de los servicios públicos, la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora y el avance de políticas regresivas por parte del gobierno andaluz, IUCA plantea un análisis riguroso y una propuesta de transformación. El documento se estructura en diferentes bloques temáticos que permiten comprender los principales retos y nuestras alternativas: la crisis climática e incendios, el futuro del mundo rural y la PAC, la defensa de la sanidad y la educación públicas, la lucha contra la precariedad y por el derecho a la vivienda, la necesidad de reforzar las políticas contra la violencia machista, nuestro compromiso internacionalista, el balance de la gestión del Partido Popular en la Junta y la apuesta decidida por la unidad de las izquierdas. Con ello, queremos contribuir a abrir un horizonte de cambio político y social en Andalucía.

Contexto internacional

Iniciamos curso político atravesados por la inestabilidad global y la ofensiva trumpista por sostener la primacía norteamericana con el necesario sometimiento a su estrategia de sus aliados occidentales. En este sentido, hemos de destacar que la cumbre de Shangái, celebrada en estos días, con la participación de países con enorme peso demográfico, territorial y económico supone un contrapeso al G7 y la OTAN. Un nuevo orden multilateral se va abriendo paso ante la crisis del unilateralismo norteamericano.

IUCA debe ser parte activa en la defensa de un mundo en paz con justicia social y bajo el dictado de la legalidad internacional que hoy está siendo enterrada en Gaza. Por eso participaremos en las acciones del 21 de septiembre convocadas por el Día Mundial por la Paz.

Crisis climática e incendios

La oleada de incendios ha vuelto a evidenciar que el calentamiento global antropogénico es real y trae consecuencias devastadoras. Particularmente Andalucía es de las regiones de la UE más vulnerables, no en vano, hasta las lluvias de la primavera padecíamos una de las sequías más largas de nuestra historia reciente y, hoy por hoy, los recursos hídricos siguen escaseando. Reconocer la existencia del cambio climático y actuar en consecuencia para mitigar sus efectos establece la línea divisoria entre los distintos proyectos políticos y modelos sociales. De facto, la derecha conservadora representada por el Partido Popular se ha posicionado en el marco negacionista de la ultraderecha. Cuando estigmatiza las políticas verdes o cuestiona la Agenda 2030 no lo hace solo por la disputa electoral que mantiene con Vox, es también una apuesta política por gestionar la crisis climática sin tocar los beneficios del capital. El modelo social de las derechas es más desigualitario en términos sociales y suicida en términos ecológicos. Detrás del negacionismo hay también una apuesta por el rearme y las guerras imperialistas. Frente a nuestra apuesta por decrecer y redistribuir, las derechas niegan la evidencia climática para seguir acumulando y expoliando.

Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios han sido dañadas más de 350 mil hectáreas, estamos en el año más catastrófico del presente siglo.

Miles de personas han tenido que ser evacuadas y sectores económicos como el turístico y el agroganadero han quedado especialmente afectados.

Hay dos causas estructurales detrás de esta oleada de incendios. La primera es el cambio climático, que es real, y que trae aparejado aumento de temperaturas, incendios e inundaciones catastróficas; y la segunda es el abandono del mundo

rural, el despoblamiento y la crisis de la agricultura y ganadería social y profesional dejan al campo más vulnerable. Tampoco es ajeno el modelo urbanístico desarrollado en muchas zonas, como la Costa del Sol, ajeno a la realidad de la crisis climática.

A estas causas hay que sumar que hemos tenido una primavera muy lluviosa y un verano extremadamente caluroso, con lo cual el campo está lleno de combustible; y que no se ha invertido lo suficiente en tareas preventivas. Los recortes en equipos de prevención y la mala gestión forestal son también factores inciden en la extensión de los incendios. Concretamente Moreno Bonilla se fue de vacaciones dejando a 300 agentes forestales en casa.

¿Qué ha hecho el Partido Popular en las comunidades afectadas donde gobierna?

Cargar contra las políticas verdes que hacen frente al cambio climático; desviar el foco al código penal pidiendo más penas contra los pirómanos, aunque la mayoría de incendios tengan otras causas; confrontar con el gobierno central y no actuar con diligencia desde las competencias autonómicas. Cada vez que sucede una catástrofe el Partido Popular pone en jaque el autogobierno de las CCAA por su gestión negligente. No es casual que tras cada catástrofe mal gestionada por las CCAA gobernadas por el Partido Popular se pidan políticas centralistas. A esto se ha sumado Moreno Bonilla, al que le sobra el autogobierno andaluz.

El gobierno andaluz de Moreno Bonilla ha tomado partido y prefiere salvar los beneficios de unos pocos a preservar el medio natural y la vida en el mundo rural. Así se ha visto en su gestión de los incendios de este verano. Durante dos años ha dejado de invertir 320 millones de euros en prevención, mantiene equipos forestales en los que la externalización y precarización son la norma, continúa maltratando la plantilla del 112 y adolece de una gestión forestal que salvaguarde el campo en las temporadas de mayor riesgo. Esto es así porque prima la lógica del recorte de gasto público en servicios esenciales y la externalización y privatización de su gestión. Este menosprecio por los servicios esenciales que nos protegen y esta falta de políticas preventivas las pagaremos en otoño cuando las previsibles

danas hagan presencia. El gobierno andaluz no está haciendo nada para mitigar los daños que puedan traer, ni en aumento de recursos ni en actualización de planes de emergencia.

La protección del campo se debe hacer desde lo público y con recursos suficientes, pero también con normativas actualizadas a la situación de emergencia climática. Es por esto por lo que trabajaremos para que la Ley de Montes de Andalucía que está obsoleta se reforme bajo criterios de protección medioambiental.

Por tanto, frente a la gestión del gobierno andaluz, marcada por recortes en prevención y abandono del medio rural, que agrava la situación. IUCA defiende una política pública de protección del territorio, con inversión suficiente, gestión forestal sostenible y reforma de la Ley de Montes.

Mundo rural y PAC

Hoy se disputa el futuro del mundo rural andaluz, el cual padece una crisis profunda expresada en el paulatino despoblamiento (solo el 17.6% de los andaluces residen ya en zonas rurales) y en la crisis del modelo de agricultura y ganadería profesional y socialmente necesarias. En este sentido, desde IUCA consideramos que la política agraria comunitaria tiene que defender la soberanía alimentaria por encima de los intereses de la agroindustria y de los tratados de libre comercio. Nos preocupa que la Comisión Europea pretenda recortar la PAC y modificar el modelo de asignación de fondos, así como los pasos atrás que está dando al respecto del Pacto Verde Europeo. Detrás de esta propuesta de PAC está la derecha europea y los intereses de países exportadores de manufacturas como Alemania. Sin duda, se corrobora lo que desde Izquierda Unida hemos advertido: el rearme se lleva por delante el estado del bienestar europeo y los fondos agrarios.

Es imprescindible una PAC bien financiada para apoyar a la agricultura y ganadería profesional y socialmente necesaria, la que arraiga a la población al territorio y brinda soberanía alimentaria, y que ayude a acometer una transición

agroecológica. La PAC tiene que jugar un papel central en el necesario relevo generacional en el campo.

Por eso estamos en contra del recorte de la PAC que planea la derecha europea: de 385.000 millones se recorta a 300.000 millones de euros. La razón de este recorte es que se aumenta el gasto en rearme. Lo hemos dicho, el rearme que quieren Partido Popular y Vox se hará recortando la PAC y recortando el estado del bienestar. La Comisión Europea, de mayoría conservadora, quiere recortar un 22% los fondos agrarios para multiplicar por 5 el gasto militar. Resulta del todo punto hipócrita la posición del Partido Popular cuando critica este recorte de la PAC mientras es la derecha europea de la que forma parte la que aprueba este recorte y mientras dicho recorte se hace para destinar recursos al rearme que apoyan.

Además, la Comisión Europea quiere unificar los fondos que reciben los Estados. Es decir, meter en un mismo paquete la PAC, los fondos de cohesión y programas de reformas. Eso conduce a que los Estados terminen recortando más aún la PAC y a enfrentar a sectores económicos y sociales por la financiación europea.

En Izquierda Unida tenemos claro que la PAC no debe sufrir ningún recorte y que se debe reorientar hacia la defensa de la soberanía alimentaria mediante:

1. El aumento del gasto en rearme se tiene que cortar y destinar esas inversiones a proteger agricultura y ganadería social y profesional y a reforzar el estado del bienestar.
2. Apostamos por una PAC justa que apoye a las pequeñas y medianas explotaciones y evite el despoblamiento del mundo rural: Una PAC que refuerce el pago redistributivo, que disminuya los pagos por superficie y con capping en las ayudas.
3. Queremos una PAC que fomente la ganadería extensiva frente a las macrogranjas
4. Y queremos más fondos de la PAC para que las pequeñas y medianas explotaciones puedan acometer una transición agroecológica.

6 de Septiembre de 2025

En defensa de la agricultura y ganadería profesional y socialmente necesarias instamos al Ministerio a que tramite la anunciada ley de agricultura social y familiar que debe responder al problema del relevo generacional, de la entrada de los fondos de inversión, de la transición agroecológica y de las relaciones de poder desiguales en la cadena alimentaria.

También hemos planteado medidas al Ministerio para la regulación del comercio de aceite de oliva y la protección del olivar tradicional. La limitada producción de las dos últimas campañas y la incertidumbre sobre la próxima cosecha ha generado distorsiones en el mercado que afectan, especialmente, al eslabón más vulnerable: el olivar tradicional, mayoritario en muchas comarcas y con alto valor ambiental, social y cultural. En este contexto, la falta de mecanismos de regulación eficaces amenaza la viabilidad de miles de explotaciones familiares y el futuro de una actividad que vertebra gran parte del medio rural. Por todo ello, hemos registrado una PNL con un paquete de medidas para regular la oferta y estabilizar el mercado, garantizar que no haya especulación ni abuso por los grandes operadores e impulsar un sistema de diferenciación, identificación y etiquetado del aceite de oliva procedente de olivar tradicional.

En esta misma línea de defensa de los cultivos estratégicos en Andalucía también hemos planteado al Ministerio y a la JUNTA de Andalucía una serie de medidas para prevenir el hongo mildiu, que ha hecho estragos en viñedos la Axarquía, el marco de Jerez, la zona de Montilla-Moriles o el Condado de Huelva, y para disponer ayudas a los agricultores afectados. La primavera lluviosa y el verano tan temprano y caluroso han propiciado esta expansión. Es evidente que la crisis climática está afectando muy negativamente al campo andaluz en forma de plagas, incendios y otras catástrofes.

En definitiva, ante lo que está en juego en nuestro campo: despoblamiento y crisis de la agricultura social y profesional por presión de la agroindustria, desde IUCA defendemos una PAC justa, bien financiada y orientada a la soberanía alimentaria, frente a los recortes impulsados por la derecha europea. Proponemos apoyar a la agricultura y ganadería profesional y socialmente necesarias, reforzar el pago

redistributivo, poner límites a las macroexplotaciones y garantizar la transición agroecológica.

Las cifras del sector turístico que ha arrojado este verano apuntan a que el modelo especulativo e intensivo toca techo. Las elevadas temperaturas derivadas de la crisis climática y la subida de los precios en el sector apuntan a las razones del descenso del gasto, a pesar de los millones de visitantes que siguen veraneando en Andalucía. No obstante, hay que ir más allá y señalar las consecuencias insostenibles, en términos medioambientales, sociales y laborales, del modelo turístico intensivo que genera precariedad y temporalidad en el empleo, gentrificación con la expansión de los pisos turísticos y presión desmesurada sobre los servicios públicos, redes de transporte y recursos hídricos por el incremento de población. Las distorsiones en la economía son evidentes en el sector servicios, que siendo el que más PIB y empleo genera, acumula casi el 70% de las cifras de paro. Apostamos por una transición del modelo turístico hacia una mayor participación en su actividad de pymes y cooperativas, con estabilidad y condiciones dignas para sus trabajadores y sostenible en términos sociales y medioambientales. Esta transición del modelo turístico es un reto impostergable para que Andalucía cambie su modelo productivo.

Servicios Públicos: Sanidad, Educación y Dependencia

El pasado martes, en Sevilla, más de 5.000 personas acompañaron a la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas en la entrega de 57.000 firmas de una ILP para debatir en el Parlamento andaluz una Proposición de Ley cuyo contenido cuenta con el apoyo de nuestro Grupo Parlamentario.

La iniciativa plantea una serie de modificaciones en el articulado de la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía, encaminadas a garantizar tres aspectos fundamentales: la puesta en marcha de un sistemas de control social y participación ciudadana en las decisiones de la Administración sobre la Sanidad Pública; el acceso de todas las personas a todos los niveles asistenciales (y el correcto funcionamiento de los

mismos); y, por último, la regulación y limitación del papel excepcional, subsidiario y temporal de la concertación con el sector privado.

Esta iniciativa es síntoma del estado crítico en el que se encuentra el sistema público de salud. Cada verano nos encontramos con la misma situación de recortes, saturación y desatención a lo que se suman las agresiones a sanitarios que proliferan en un contexto de colapso. A pesar de la indignación popular, bien expresada en las movilizaciones sostenidas y en las encuestas de opinión pública, el gobierno andaluz de Moreno Bonilla sigue implantando sin piedad su modelo de desmantelamiento del sistema público y de externalizaciones como paso previo a conformar un sistema dual, público y privado, que segrega socialmente y vulnera el derecho universal a la salud. Recientemente el Tribunal administrativo de recursos contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA) ha dado luz verde a nuevos conciertos por valor de 533 millones de euros. Volvemos a decirlo: el gobierno andaluz de Moreno Bonilla desprotege a los andaluces y andaluzas, y pone en riesgo la salud pública.

Esta lógica de adelgazamiento de lo público y externalización de servicios que deben garantizar los derechos sociales y la igualdad también opera en la gestión educativa. El pasado curso escolar culminó con la desastrosa gestión de las oposiciones docentes. El maltrato e injusticias padecidas por las personas opositoras motivaron que desde Izquierda Unida pidiéramos explicaciones al gobierno andaluz y solicitáramos la intervención de la alta inspección. Este nuevo curso escolar se inicia con más recortes y cierres de aulas públicas. La Junta de Andalucía ha eliminado el programa de auxiliares de conversación en las escuelas públicas y escuelas oficiales de idiomas, no dispone el personal especializado necesario para atender al alumnado diverso y en este curso se llegará a las 3000 aulas públicas cerradas. Ni un aula en centros concertados se ha cerrado mientras ya llevan 3000 aulas en centros públicos. Especialmente grave es la privatización acelerada de la educación superior universitaria a pesar de las movilizaciones de la comunidad universitaria y quejas del consejo de rectores. Junto a la infrafinanciación de las universidades pública se produce un trato de favor a la apertura de nuevas universidades privadas que no cumplen con los mínimos

criterios de calidad, así como se les entrega la impartición de grados que se niegan en la pública, como ha ocurrido con el grado de Ingeniería Biomédica.

El PP de Moreno Bonilla ha emprendido desde que entró al Gobierno andaluz una política constante de desmantelamiento de la universidad pública andaluza. No solo son los retrasos, impagos y falta de planificación constantes en la financiación universitaria que denuncian sindicatos y rectores, sino que desde 2018, el presupuesto a las universidades públicas andaluzas prácticamente se ha quedado igual, reduciendo su peso respecto al PIB; sin contar con los grandes recortes que sufrió en 2019 y 2020 o el recorte en el último Plan de Infraestructuras Universitario. Todo ello se entiende mucho mejor cuando vemos como el PP andaluz se ha dedicado en estos 7 años ha engordar paralelamente la universidad privada, con la aprobación de 4 nuevas universidades y 34 nuevos títulos privados, la cesión de miles de metros cuadrados de suelo público o el trato desigual a la hora de negar títulos en la pública que se los concede por la puerta de atrás a la privada.

Las políticas antisociales del gobierno andaluz hacen mella en la clase trabajadora andaluza. Así se advierte el retroceso del salario mediano en Andalucía con respecto al del conjunto de España. Con Moreno Bonilla la clase trabajadora andaluza se queda descolgada con respecto a las condiciones del resto del Estado. En los once años que van desde 2008 a 2019 perdimos tres puntos respecto al salario mediano nacional. En los años que lleva el Partido Popular al frente de la JUNTA se han perdido al doble de velocidad por las políticas neoliberales fracasadas que aplica el Partido Popular. Las consecuencias de esta pérdida de poder adquisitivo son especialmente dolorosas en Andalucía por las elevadas tasas de precariedad y porque el precio de la vivienda ha crecido un 54% en los últimos años, diez puntos más que en el resto del Estado. Unas condiciones que sufre especialmente la juventud andaluza que sigue contemplando la emigración como alternativa. Si a esto se suma el deterioro de los servicios públicos y la insubordinación del gobierno andaluz a aplicar la ley de vivienda e intervenir en el mercado nos encontramos con una clase trabajadora andaluza desamparada por la JUNTA.

En esta coyuntura de radicalización derechista del gobierno andaluz, de insubordinación de Moreno Bonilla a aplicar las leyes del gobierno de coalición que protegen a la clase trabajadora andaluza y de desmantelamiento de los servicios públicos, IUCA va a continuar en movilización social y en la ofensiva institucional.

Ante el clamor popular contra el deterioro de la sanidad andaluza, reflejado en múltiples plataformas por toda Andalucía, concentradas en la Marea Blanca, con más de 50.000 firmas recogidas y presentadas, la ciudadanía exige frenar la externalización y defender un sistema universal. Desde IUCA venimos trabajando activamente, denunciando los conciertos millonarios aprobados por el gobierno de Moreno Bonilla y reclamando inversión en personal, infraestructuras y atención primaria para garantizar el derecho a la salud, algo que la negativa a aceptar la quita también afecta, ya que se pierde una oportunidad de inversión. Asimismo, y ante el arranque del nuevo curso escolar arranca, con más recortes y cierre de aulas públicas, mientras se favorece la educación privada y concertada, desde IUCA seguiremos denunciando la eliminación del programa de auxiliares de conversación, la falta de recursos para alumnado diverso y la privatización de la universidad pública, así como defendiendo y peleando más financiación, ratios adecuadas y un sistema público de calidad que garantice igualdad de oportunidades.

Del mismo modo, la situación de la dependencia en Andalucía refleja un grave abandono institucional. Las listas de espera superan las 60.000 personas, condenando a familias, sobre todo a mujeres cuidadoras, a sostener solas el peso de los cuidados mientras miles de dependientes fallecen sin recibir la ayuda que les corresponde por ley. En lugar de reforzar la red pública de atención, la Junta recorta financiación y externaliza servicios, beneficiando a intereses privados frente a los derechos de las personas. El gobierno andaluz hace trampas con los fondos que recibe, omite las cuantías del copago y esconde los gastos impropios que los ayuntamientos tienen en materia de dependencia. Desde IUCA exigimos inversión inmediata en personal y servicios públicos de proximidad, reducción

drástica de las listas de espera y cumplimiento estricto de la Ley de Dependencia, para que ninguna persona quede desamparada por falta de recursos.

Violencias machistas

No podemos desatender otra realidad que para IUCA resulta prioritaria en cualquier contexto y en cualquier coyuntura. Y es que Andalucía es la comunidad con más casos activos de violencia de género, una cuarta parte del total en todo el país. El Ministerio de Interior tiene detectados en el Sistema VioGén a fecha del pasado 31 de mayo de este año un total de 102.575 casos activos por violencia de género, de los que 26.587 se localizan en Andalucía. Desde 2019, el gobierno de la Junta ha estado desmantelando el marco institucional contra la violencia machista, eliminando progresivamente el lenguaje de género de las comunicaciones oficiales, sustituyendo el término ‘violencia machista’ por el eufemismo negacionista de la ultraderecha, ‘violencia intrafamiliar’, y recortando en cinco millones de euros el presupuesto destinado en 2025 a políticas contra esta violencia. Recientemente el gobierno de Moreno Bonilla se negó a debatir en el pleno el Informe del grupo de trabajo de violencia de género mientras vende como logro, por otra parte, los indignos e insuficientes módulos prefabricados para los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual en Andalucía.

Por todo ello, ante un Gobierno andaluz que recorta recursos, adopta el discurso de la ultraderecha y debilita el marco institucional de protección de las mujeres, de las víctimas de violencia de género, IUCA exige reforzar presupuestos, garantizar centros de crisis 24 horas con recursos dignos y aplicar políticas efectivas contra las violencias machistas. En este sentido, seguiremos defendiendo justicia para Juana Rivas y sus hijos ante el juicio al que se enfrenta Arcuri en este mes.

Compromiso con Andalucía y con la causa palestina

La militancia de IUCA y los grupos institucionales se seguirán volcando este nuevo curso político en los conflictos que están movilizando a muchas y muchos

andaluces: el deterioro de la sanidad pública, la vulneración de derechos del alumnado diverso en la escuela pública, la carestía de la vivienda, la implantación de macroproyectos de renovables en tierras fértiles y el genocidio palestino.

En particular, el compromiso de IUCA con el pueblo palestino es absoluto y participaremos, como hasta ahora, en tantas campañas y acciones se produzcan. Nos sentimos muy orgullosos de que militantes de IU (Manolo García “Teniente”, Rafael Borrego y Néstor Prieto) se hayan sumado a la flotilla internacional, continuando con el hilo internacionalista que siempre ha tenido IUCA. Con objeto de que los ayuntamientos andaluces gobernados por IUCA sean punta de lanza institucional frente al genocidio palestino no mantendrán ninguna relación económica con ninguna empresa que opere en los territorios palestinos ocupados. A aquellas empresas que obtienen beneficios gracias a la vulneración de derechos humanos en Palestina, recogidas en listado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), no se les licitará ningún contrato público allá donde gobierna IUCA

Así, desde IUCA mantenemos nuestro apoyo firme al pueblo palestino. De hecho, militantes de nuestra organización participan en la flotilla internacional y en los ayuntamientos gobernados por IUCA no se contratará con empresas que operen en territorios ocupados. Andalucía debe ser referente de solidaridad internacionalista.

Balance del gobierno andaluz

Comienza el que debe ser el último curso político con Moreno Bonilla al frente del gobierno andaluz. El balance de gestión del Partido Popular al frente de la JUNTA es calamitoso para la clase trabajadora andaluza y para el autogobierno. El Partido Popular ha aplicado, sin piedad, un plan para expropiar derechos y servicios públicos en favor del negocio de unos pocos. Dar privilegios fiscales a las grandes fortunas, entregar los sectores económicos y servicios públicos a fondos de inversión y confrontar contra las políticas progresistas del gobierno de coalición ha sido el leit motiv de Moreno Bonilla. Cada día que pasa presidiendo la JUNTA de Andalucía se acrecienta la inseguridad y desprotección de quienes necesitan

atención médica, acceder a una vivienda, cursar estudios superiores o ayuda a la dependencia.

Como parapeto de su política antisocial, el Gobierno andaluz se ha servido de la propaganda para la cual no ha dudado en instrumentalizar la radio televisión pública andaluza. Fue escandaloso que el incendio de la Mezquita no hiciese cortar la retransmisión de una corrida de toros. Es muestra del deterioro al que se ha llevado al ente público. El gobierno andaluz se sirve de la propaganda, de la confrontación permanente contra el gobierno de coalición y de Cataluña para desviar la atención de su gestión, pero también está transitando por los marcos que instala la ultraderecha. Especialmente grave es cómo el gobierno andaluz está estigmatizando a la población migrante, incluso a los menores desamparados que llegan solos a nuestra tierra. En lugar de concebir a los migrantes como sujetos de derecho son considerados como un gasto o, pero aún, como potenciales delincuentes. Se olvida interesadamente las causas de estas migraciones, la realidad histórica y presente de la sociedad andaluza (que es tierra de emigración), y el enriquecimiento cultural, social y económico que supone la población migrante en las sociedades de acogida.

Esta semana el Consejo de Ministros ha aprobado la posibilidad de que las CCAA se acojan a una quita de la deuda que mantienen con el Estado. Andalucía se vería beneficiada con una rebaja de su deuda de 18.700 millones de euros. De nuevo, Moreno Bonilla ha anunciado que rechazará esta quita. Una vez más, cuando se trata de elegir entre los intereses de los andaluces y andaluzas o ser un peón más en la estrategia de Feijoo de confrontación con el gobierno de España, Moreno Bonilla lo tiene claro. Lo que Feijoo diga por encima de lo que a Andalucía beneficia. Rechaza la quita de deuda mientras mantiene privilegios fiscales a las grandes fortunas y mientras tiene las listas de espera sanitarias más largas de España. Pide una reforma del sistema de financiación mientras vulnera el acuerdo del Parlamento de 2018 por una financiación autonómica que potencie los servicios públicos y aumente la capacidad recaudatoria de la Comunidad Autónoma.

El balance de Moreno Bonilla es claro: recortes, privatización de servicios públicos, desprotección de la clase trabajadora y sumisión a los intereses de Feijóo por

encima de Andalucía. Rechazar la quita de la deuda de 18.700 millones es un ejemplo más de su deslealtad hacia el pueblo andaluz.

IUCA denuncia el modelo antisocial del Partido Popular y plantea una alternativa basada en derechos, igualdad y justicia social. Cuanto más tiempo pase Moreno Bonilla en el Gobierno más pasos atrás dará Andalucía.

Por Andalucía garantiza el cambio político

Desde IUCA respondemos a la demanda popular de unidad de las izquierdas andaluzas. Vamos a entregarnos para que la confluencia de fuerzas políticas y personas independientes de Por Andalucía sea determinante para echar a las políticas antisociales de la JUNTA de Andalucía. La gente quiere unidad y cambio político y Por Andalucía no va a defraudar. Desde IUCA asumimos el reto de dar carpetazo a los años negros de gobiernos de Moreno Bonilla.

Por Andalucía da cuerpo a un proyecto de cambio autocentrado en Andalucía y aglutinante del andalucismo y de las distintas izquierdas. Gracias a que todas las fuerzas políticas que conforman Por Andalucía han antepuesto los intereses de la clase trabajadora andaluza y se han centrado en los problemas de Andalucía culminamos una legislatura en la que la colaboración ha prevalecido sobre la división. En este sentido, la izquierda andaluza es ejemplo allende Despeñaperros donde otros espacios de confluencia no superaron sus contradicciones.

Coincidimos plenamente con quienes piden la unidad para transformar Andalucía y hacer valer la larga lucha del pueblo andaluz. Por eso les invitamos a pasar de las palabras a los hechos con todas y todos nosotros implicándose en el proceso de elaboración programática, movilización electoral y construcción de candidatura que va a dar lugar a la candidatura de unidad de Por Andalucía. Tras meses de debates y acuerdos, en septiembre se aprueba el proceso de primarias que ha de garantizar la plena participación de todas las fuerzas políticas y personas independientes que quieren responder a la demanda popular de unidad y al reto histórico de echar a Moreno Bonilla para transformar Andalucía.



6 de Septiembre de 2025